

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

AITOR ESTEBAN BRAVO, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

La Audiencia Nacional española autorizó la extradición de Ali Aarrass a Marruecos el 21 de noviembre de 2008. La decisión fue confirmada en apelación el 23 de enero de 2009, sobre la garantía ofrecida por el gobierno marroquí de que Ali Aarrass no sería condenado a muerte ni a cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional. El Consejo de Ministros español aprobó su extradición el 19 de noviembre de 2010 y fue enviado a Marruecos el 14 de diciembre de 2010, desde cuando está detenido.

La extradición se llevó a cabo a pesar de que:

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en sus Observaciones finales al quinto informe presentado por España en noviembre 2009, expresó su preocupación ante la utilización de las denominadas garantías diplomáticas recordando que bajo ninguna circunstancia se debe recurrir a las mismas como salvaguardia contra la tortura o los malos tratos cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a tortura o malos tratos a su regreso. Por ello pidió a España que en el caso de utilizarlas, informara al Comité sobre los requisitos mínimos del Estado parte para dichas garantías, las medidas de seguimiento que ha adoptado en tales casos, así como la exigibilidad jurídica de las garantías dadas.

El 26 de noviembre de 2010, el Relator Especial para la protección y promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo junto con el Relator Especial sobre la Tortura, enviaron una comunicación a España. En ella se recordaba que el Comité contra la Tortura señaló que “las garantías diplomáticas no son dignas de crédito y son ineficaces para proteger de la tortura y de otros malos tratos”, debido entre otras cosas a la falta de mecanismos eficaces para su seguimiento posterior, y la inexistencia de vinculación jurídica. En dicha comunicación, hacían un llamamiento al Gobierno para buscar una clarificación de los hechos para asegurar que el derecho a la integridad física y mental de la persona mencionada fueran protegidos, pidiendo que esta persona no fuese extraditada, si existe riesgo real de tortura u otros malos tratos.

Amnistía Internacional intentó impedir la extradición y condenó la decisión adoptada por el Gobierno español. En numerosas ocasiones se alertó a las autoridades españolas

de que no podían aceptar las “garantías diplomáticas” ofrecidas por el Gobierno marroquí, así como del riesgo de que Ali Aarrass fuera detenido en régimen de incomunicación, sufriera tortura y otros malos tratos y fuera juzgado sin las debidas garantías. Lamentablemente, los temores de Amnistía Internacional se confirmaron.

De acuerdo con la información de la que dispone Amnistía Internacional, tras su extradición a Marruecos, Ali Aarrass quedó recluido en régimen de incomunicación y sufrió tortura durante 12 días, del 14 al 24 de diciembre de 2010, en un centro de detención secreta de Témara, donde afirma que le torturaron reiteradamente.

Ali Aarrás le dijo al Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, Juan E. Méndez, que lo habían golpeado en las plantas de los pies, aplicando descargas eléctricas, colgado de las muñecas durante largos periodos y quemado con cigarrillos. En una vista celebrada en febrero de 2011, dijo al juez de instrucción que su “confesión” de cargos de terrorismo se había obtenido por medio de tortura. Según la información disponible, el centro donde Ali Aarrass fue recluido lo gestionaba la la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST)

El Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura lo visitó bajo custodia, junto con un perito médico independiente, en septiembre de 2012. Ambos confirmaron posteriormente que habían observado señales de tortura compatibles con su testimonio.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU del 28 de agosto de 2013, declaró arbitraria la detención de Ali Aarrass y pidió que sea puesto en libertad de inmediato y que se le ofrezca la debida reparación.

Durante su sesión de julio 2014, el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió que España había violado el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) cuando extraditó a Ali Aarrass a Marruecos, porque no evaluó adecuadamente el riesgo de tortura y malos tratos al que se enfrentaba en Marruecos. Y ordenó a las autoridades españolas a otorgar a Ali una compensación adecuada por la violación, teniendo en cuenta la tortura real y los malos tratos que sufrió en Marruecos como consecuencia de la extradición, así como para tomar todas las medidas posibles para cooperar con las autoridades marroquíes para garantizar Ali Aarrass está tratado bien en Marruecos.

Por todo lo anterior, se formula las siguientes preguntas al gobierno:

¿Qué ha hecho el gobierno para la puesta en marcha de las medidas dictaminadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU a España en su sesión de julio 2014 en relación al caso de Ali Aarrass?

¿Se ha interesado por la situación en la que se encuentra Ali Aarrass, exigiendo a las autoridades marroquíes que garanticen que recibe un trato humano en todo momento?

¿Ha hecho gestiones ante las autoridades marroquíes a fin de que respeten los derechos de Ali Aarrass como preso, permitiéndole el contacto con su familia y sus abogados?

¿Ha hecho gestiones ante Marruecos a fin de llevar a efecto la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que solicitó el 28 de agosto de 2013 a Marruecos la liberación inmediata de Ali Aarraas y que éste fuera compensado adecuadamente?

Madrid, Congreso de los Diputados a 15 de diciembre de 2016



Fdo.: Aitor Esteban Bravo

Diputado